

R2023000695

Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Cabildo Insular de Lanzarote relativa al importe que se abonó a la UTE integrada por SATOCAN, S.A. – IMESAPI, S.A. por prestar el servicio de conservación y mantenimiento de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras.

Palabras clave: Cabildos Insulares. Cabildo Insular de Lanzarote. Canal de denuncias. Información institucional. Información en materia de contratos. Información de las obras públicas.

Sentido: Estimatoria parcial.

Origen: Silencio administrativo.

Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Cabildo Insular de Lanzarote, y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 11 de diciembre de 2023 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de [REDACTED], en su calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Cabildo Insular de Lanzarote el 23 de agosto de 2023 (2023-E-RE-16008), reiterada el 8 de octubre del 2023, relativa **al importe que se abonó a la UTE integrada por SATOCAN, S.A. – IMESAPI, S.A. por prestar el servicio de conservación y mantenimiento de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras dependientes de la corporación insular.**

Segundo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 18 de diciembre de 2023, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Cabildo Insular de Lanzarote se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación.

Tercero.- El 28 de diciembre de 2023, con registro de entrada número 2023-002738, se recibió en este Comisionado respuesta de la entidad reclamada en la que la Consejera delegada del área de Gobierno Abierto informa lo que a continuación se expone:

“En relación a su solicitud de expediente y audiencia de reclamo recibida en esta Unidad el día

18/12/2023, con registro de entrada n.º 2023-E-RC-21449, interpuesta por ... contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Cabildo Insular de Lanzarote el 23 de agosto de 2023 (R.E. 2023-ERE-16008) y reiterada el 08 de octubre del 2023 **relativa a conocer importe que abonó esa administración a la UTE (UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS), integrada por SATOCAN, S.A. IMESAPI, S.A**, le comunicamos lo siguiente:

1.- Con fecha 23 de julio de 2022, se recibió en esta Unidad escrito de ..., con registro de entrada n.º 2022-E-RE-12509, donde solicita la siguiente información pública:

[...] 11) SE REITERA UNA VEZ MAS JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: Que, el técnico/a responsable del Portal de Transparencia de ese cabildo insular, nos remita los gastos desglosados de lo que, a pagado ese cabildo, a la empresa responsable de márgenes y mantenimiento de carreteras, desde el mes de enero de presente año, hasta la fecha del día de hoy. [...]

2.- Se resuelve conceder el acceso a la información solicitada anexando al Decreto n.º 2022-5987 informe emitido por el Director Accidental del departamento del Órgano de Gestión Económico Financiera.

3.- Con fecha 22/11/2022, registro de entrada n.º 2022-E-RE-19763, se recibió solicitud de ..., donde solicita:

[...] si hay algún gasto y concepto realizado en el año 2017, con relación a la CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LOS MARGENES Y ZONAS AJARDINADAS DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. [...]

4.- Una vez examinada la documentación se procede a facilitar la información al solicitante, según consta en Decreto Resolución n.º 2022-7719, de fecha 25/11/2022, pudiendo para ello acceder a través del siguiente enlace:

<https://presupuesto.cabildodelanzarote.com/pagos/#2017>

5.- Con fecha 11 de agosto de 2023, con registro de entrada n.º 2023-E-RE-15392, el interesado presentó solicitud en la que solicita información sobre los gastos realizados en el servicio de los márgenes de las carreteras.

6.- Con fecha 17/08/2023, mediante Decreto Resolución n.º 2023-5272 se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública presentado por ..., en la que solicita información sobre los gastos realizado en el servicio de los márgenes de las carreteras por considerarse que coinciden con otras presentadas por el mismo solicitante y ser atendidas.

7.- Con fecha 17 de agosto de 2023, se recibe escrito de ..., con registro de entrada n.º 2023-E-RE-15715, donde nuevamente solicita listado detallado de los gastos realizados desde la firma del Pliego, desde el año 2020 hasta marzo de 2023, con el servicio de márgenes de las carreteras.

8.- Con fecha 24 de agosto de 2023, se resuelve inadmitir a trámite la solicitud por ser reiterada, Resolución n.º 2023-5457, recordándole al solicitante que dicha información se encuentra disponible en la página del Portal de Transparencia así como en la web Presupuestos de esta Corporación y es posible acceder a través de:

<https://transparencia.cabildodelanzarote.com/t>

<https://presupuesto.cabildodelanzarote.com/pagos/#2022>

Por todo lo anteriormente expuesto, desde este Cabildo se considera que se ha cumplido en proporcionarle la información solicitada a ..."

Cuarto.- Examinada la respuesta dada por la entidad insular al trámite de audiencia del procedimiento de reclamación, reproducida en el antecedente de hecho anterior, este Comisionado no puede constatar que se haya dado respuesta a la solicitud de información de fecha 23 de agosto de 2023, reiterada el 8 de octubre de 2023, pues en el escrito de la Consejera delegada del área de Gobierno Abierto no se hace referencia a la misma.

A tales antecedentes son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima." El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que *"la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos."*

II.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que "1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias

personales o condición o situación social”. En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular.

III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 11 de diciembre de 2023. Toda vez que la solicitud fue realizada el 23 de agosto de 2023, reiterada el 8 de octubre de 2023, y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo.

V.- Una vez analizado el contenido de la solicitud, esto es, **información sobre el importe que se abonó a la UTE integrada por SATOCÁN, S.A. – IMESAPI, S.A. por prestar el servicio de conservación y mantenimiento de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras**, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de información que, de existir, obra en poder de un

organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible.

Ahora bien, debe subrayarse que el derecho de acceso solo permite obtener información ya existente, no habilitando para obligar a la entidad reclamada a elaborar información nueva, incluso aunque dicha información debiera haberse generado en su momento. Así, el derecho de acceso no faculta para exigir, por ejemplo, la realización *a posteriori* de trámites que no se practicaron al tramitar un determinado procedimiento, ni la motivación de decisiones previamente tomadas, ni la realización de informes, ni que se informe sobre las actuaciones que se piensa llevar a cabo en el futuro sobre un determinado asunto. En tales supuestos este comisionado entiende que, en su caso, debe indicarse a los reclamantes que la información solicitada no existe, a fin de que pueda actuar en consecuencia.

Asimismo, la Sentencia 60/2016, de 25 de abril de 2016, del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid en procedimiento ordinario 33/2015, referente al coste de cada uno de los canales de televisión de RTVE. Esta sentencia estima el recurso interpuesto por la representación procesal de RTVE contra la resolución nº R/0105/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la cual anula y deja sin efecto al considerar que el artículo 13 de la LTAIBG “reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la **información que existe** y que está ya disponible, lo que es distinto de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”.

VI.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “*1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación*”.

El artículo 46 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, dispone que “*1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante*”.

VII.- Al no haber remitido la corporación insular la información requerida por el ahora reclamante, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si existe más información que la ya facilitada al ahora reclamante y si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o alguno de los límites de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley.

Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la pasiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria.

Y en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública,

RESUELVO

1. Estimar parcialmente la reclamación presentada por [REDACTED], en su calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy, contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Cabildo Insular de Lanzarote el 23 de agosto de 2023, reiterada el 8 de octubre del 2023, relativa **al importe que se abonó a la UTE integrada por SATOCAN, S.A. – IMESAPI, S.A. por prestar el servicio de conservación y mantenimiento de márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras dependientes de la corporación insular**, en los términos de los fundamentos jurídicos quinto a séptimo.
2. Requerir al Cabildo Insular de Lanzarote para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelto primero en el plazo de quince días hábiles, siempre que esa documentación exista; y para que, de no existir tal información, se le informe sobre tal inexistencia.
3. Requerir al Cabildo Insular de Lanzarote a que en el plazo de quince días hábiles remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución.
4. Instar al Cabildo Insular de Lanzarote para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen.
5. Recordar al Cabildo Insular de Lanzarote que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los

requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.

De acuerdo con el artículo 51 de la LTAIP, esta reclamación es sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, ante la presente resolución emanada de un órgano del Parlamento de Canarias, que es plenamente ejecutiva y que pone fin a la vía administrativa, proceden únicamente dos vías alternativas de actuación en derecho: el cumplimiento de la resolución en el plazo señalado en la misma o, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

De no activarse el cumplimiento de esta resolución estimatoria o, en su defecto, el recurso contencioso-administrativo, será de aplicación a los responsables de transparencia y acceso a la información pública del ente reclamado, el régimen sancionador previsto en los artículos 66 y siguientes de la LTAIP.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Daniel Cerdán Elcid

Resolución firmada el 29-04-2023

[REDACTED], - ASOCIACIÓN DE VECINOS TITERROY
SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE